



NACIONES UNIDAS
REPÚBLICA DOMINICANA



Análisis Común de País (CCA) República Dominicana 2021

Resumen Ejecutivo



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Mayo de 2022



Antecedentes

La República Dominicana fue pionera al promulgar, en 2012, una Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) visionaria que presenta sorprendentes similitudes y alineación con la Agenda 2030, y la cual se articula alrededor de cuatro ejes estratégicos que definen la visión del modelo de desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible al cual aspira el país. La END 2030 propone reducir las principales brechas y rezagos que enfrenta la sociedad dominicana en los ámbitos institucional, social, económico y ambiental, así como hacer frente a los retos que depara el futuro, asociados a un mundo en constante cambio en términos tecnológicos, climáticos y de las relaciones entre las naciones y las poblaciones a nivel global. En línea con esta visión, el modelo de desarrollo del Gobierno dominicano se centra en “mejorar la calidad de vida de las personas”, tratando de cerrar la brecha entre un crecimiento económico muy dinámico y los indicadores de bienestar. Para ello, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), en el horizonte temporal 2021-2024, prioriza 33 políticas que generan impacto directo en la vida de las personas y en el desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible del país. De esta manera, la República Dominicana asume los principios de la Agenda 2030 y los ODS como un compromiso de Estado y una prioridad de gobierno.

Pese al dinamismo de su economía, que presenta gran potencial para la implementación de los ODS, y el progreso mostrado en los últimos veinte años, la trayectoria de la República Dominicana hacia el logro de la END y, por tanto, de la Agenda 2030, muestra un panorama mixto. Se han logrado avances en algunas metas, pero persisten desafíos en la superación de múltiples brechas económicas, sociales, medioambientales e institucionales, así como en la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos.

El país se encuentra en un punto de inflexión en su ruta hacia el modelo de desarrollo que se trazó para el 2030. La pandemia de la COVID-19 ha profundizado brechas estructurales, haciendo aparecer desafíos emergentes y revirtiendo avances en diversos ámbitos, particularmente en la reducción de la pobreza y las desigualdades. El crecimiento económico no se está traduciendo aún en la creación de trabajo decente, limitada por la alta informalidad del mercado laboral. Las desigualdades de género son profundas, siendo la violencia contra las mujeres y las niñas un gran desafío para el país. Existen importantes desigualdades territoriales, y la condición insular y ubicación geográfica, y por tanto a la exposición al riesgo, aumentan la vulnerabilidad e impactan en el desarrollo sostenible del país. En esta Década de Acción, la República Dominicana necesita transformar sus desafíos en oportunidades de progreso para una rápida recuperación, mientras avanza en la implementación integral de la END 2030 y los ODS.



Población y demografía

La República Dominicana es un pequeño estado insular en desarrollo, con una población estimada en 2021 de poco más de 10.5 millones de habitantes, de los cuales el 49.9% son hombres y 50.1% mujeres[1]. El país es eminentemente joven, dos terceras partes de la población tiene menos de 34 años y una tercera parte es menor de 18 años. La República Dominicana se beneficia actualmente de un bono demográfico, ya que el grueso de la población tiene entre 15 y 64 años de edad, por lo que cuenta con una vigorosa fuerza de trabajo que comenzará a descender a partir del 2030. Como resultado de un crecimiento acelerado de urbanización, el 82.5% de las personas se concentran en áreas urbanas, proporción que aumentará al 92% en el 2050[2].

Casi el 12% del total de la población tiene alguna discapacidad[3] y, conforme al concepto teórico de afrodescendencia, el 82% de la población residente en el país es afrodescendiente[4]. La República Dominicana es un país que ha experimentado en las últimas décadas flujos significativos tanto de emigración como de inmigración[5]. Se calcula que el 12% de la población dominicana reside en el extranjero, mientras que la población inmigrante representa el 5.6% del total[6].

La composición demográfica, la diversidad de su población, su distribución geográfica y las dinámicas migratorias plantean retos de política pública para atender simultáneamente necesidades particulares, presentes y futuras, de los distintos grupos de población, especialmente de los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

[1] Oficina Nacional de Estadística (2010). Censo de Población y Vivienda 2010.

[2] Oficina Nacional de Estadística, ENHOGAR 2021, Informe de Resultados, P. 26. <https://bit.ly/3gpuXyC>

[3] OECD/CIECAS (2017), Interacciones entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo en República Dominicana, Caminos de Desarrollo, OECD Publishing, Paris.

[4] Oficina Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2017.

[5] OECD/CIECAS (2017), Interacciones entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo en República Dominicana, Caminos de Desarrollo, OECD Publishing, Paris.

[6] Oficina Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2017.

La República Dominicana es un país de ingreso medio alto y una de las economías más dinámicas y prósperas de América Latina y el Caribe. Entre el periodo 2000-2019, el país experimentó un crecimiento promedio anual del 5.4% del PIB. La crisis causada por la pandemia en 2020 fue un punto de inflexión del panorama macroeconómico, pero la oportuna respuesta del gobierno permitió una rápida recuperación del 12.3% del PIB en 2021, siendo esto un signo de buena resiliencia. Las proyecciones para los próximos años apuntan a que el país mantendrá la senda de expansión económica a un ritmo anual del 5% del PIB real.

Si bien dinámico, el crecimiento presenta desafíos para convertir la riqueza en prosperidad compartida y en bienestar para la mayoría de la población. La expansión económica no ha resultado en mayor integración productiva y las brechas entre territorios, sectores productivos y tamaño de las empresas son amplias. El modelo económico presenta limitaciones estructurales para crear empleos de calidad, condición esencial para reducir la pobreza y las desigualdades. El mercado laboral está marcado por la alta informalidad (58.1%)[7] y persisten retos importantes para transitar hacia el trabajo decente. Existen brechas importantes en la participación económica de las mujeres y los jóvenes, y otros grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, personas con diversidad sexual y de género, migrantes, enfrentan desafíos en materia de oportunidades laborales.

El impacto de la pandemia ha demostrado que la estructura económica se encuentra sobreexpuesta a golpes externos [8], y que el país deberá prepararse mejor para un mundo en el que la resiliencia, la diversificación, la competitividad, la innovación y el reparto inclusivo de los beneficios del crecimiento económico jugarán un rol crucial para asegurar una recuperación inclusiva, sostenible y enfocada en las personas.

[7] Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza, con base en cifras oficiales del Banco Central de la República Dominicana. Cifras preliminares para 2021.

[8] OECD/UNCTAD/ECLAC (2020), Production Transformation Policy Review of the Dominican Republic: Preserving Growth, Achieving Resilience, OECD Development Pathways, OECD Publishing, Paris.

03 Pobreza y desigualdad

Hasta el año 2019 la incidencia de la pobreza monetaria había mostrado una reducción sostenida que la pandemia revirtió. Las estimaciones oficiales indican que la pobreza aumentó de 21% en 2019 a 23.9% en 2021, lo que significa que más de 300 mil personas cayeron en pobreza monetaria desde que comenzó la crisis sanitaria[9]. La pobreza no es homogénea, afecta en mayor proporción a las mujeres, y las tasas de incidencia son significativamente más altas en las zonas rurales y en determinadas regiones del país[10]. La crisis del cuidado, exacerbada durante la pandemia, aumenta la pobreza de tiempo de las mujeres, afecta la calidad de vida de quienes requieren cuidados (niños y niñas, personas envejecientes y personas con discapacidad), y tiene repercusiones socioeconómicas para los hogares más vulnerables.

La República Dominicana exhibe persistentes desigualdades que impactan las perspectivas de lograr el desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible. El reporte global de desarrollo humano clasifica a la República Dominicana dentro de la categoría de desarrollo humano alto (0,756), pero el país pierde una quinta parte de su desarrollo humano potencial al ajustarlo por la desigualdad y casi la mitad (44%) al ajustarlo por las desigualdades de género[11]. En el transcurso de la década pasada, el país registró una notable reducción de la desigualdad distributiva, disminuyendo el Índice de Gini de 0.433 en 2016 a 0.393 en 2021; aun así, el ingreso del 40% más pobre de la población es apenas el 55% del ingreso del 10% más rico[12]. Las desigualdades territoriales persisten, siendo las provincias fronterizas las que registran los índices de pobreza y desarrollo humano más bajos, mientras que las vulnerabilidades en las zonas rurales y la precariedad urbana conducen a la marginación de segmentos de la población.

Los avances de las últimas dos décadas en el área social, con énfasis en materia de cobertura y acceso a los bienes y servicios sociales, así como en la mejora de la calidad de vida de la población, son notables. Sin embargo, la República Dominicana enfrenta el desafío de cerrar múltiples brechas en el ejercicio efectivo de los derechos sociales básicos, entre ellos el derecho a la protección social, la salud, la educación y la alimentación. Las brechas se profundizan por la intersección de factores asociados al sexo, la edad, el lugar de residencia, el nivel socioeconómico, la condición de discapacidad, la situación migratoria irregular, la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Los retos de cobertura, calidad e inclusión de los servicios sociales limitan la acumulación de capital humano y tienen un impacto en la productividad y capacidad de la fuerza laboral, presente y futura, del país.

[9] Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza de la República Dominicana, 2021. <https://bit.ly/3MxbiJa>

[10] Gobierno de la República Dominicana (2021), Informe Nacional Voluntario 2021.

[11] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2019). PNUD actualiza el mapa interactivo del desarrollo humano para las 32 provincias del país. <https://bit.ly/3VnbnD3>

[12] Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Boletín de Estadísticas... op cit.



Cambio climático, resiliencia y medio ambiente

Por su condición de pequeño estado insular en desarrollo y ubicación geográfica, la República Dominicana es altamente vulnerable a eventos climáticos extremos, los desastres y los efectos del cambio climático, así como a los terremotos, ya que la isla está atravesada por numerosas fallas sísmicas. De acuerdo con el Banco Mundial[13], aproximadamente el 92% de su producción económica y el 97% de su población se encuentran en zonas vulnerables a dos o más tipos de amenazas. Se prevé que el cambio climático exacerbe la vulnerabilidad en el futuro, con un incremento en la frecuencia y severidad de los eventos extremos. En este sentido, el país podría sufrir daños por desastres relacionados con los huracanes y los sismos de, por lo menos, US\$ 667 millones cada 10 años en promedio (más de un 1% del PIB[14]), con efectos sociales en los hogares más pobres y vulnerables, y con importantes impactos en los grupos más vulnerables, incluyendo la niñez, por la falta de resiliencia y continuidad de los servicios.

La República Dominicana alberga una cantidad considerable de ecosistemas, hábitats y especies, tanto terrestres como costero-marinos y de agua dulce, por lo que forma parte del sitio sobresaliente de la biodiversidad del Caribe, uno de los cinco más importantes del planeta. Sin embargo, enfrenta desafíos medioambientales que ponen en riesgo su capital natural, sustento de su economía y de los medios de vida de las personas. La deforestación y su impacto en la biodiversidad, la calidad de los suelos, la disponibilidad y calidad de agua potable, junto con la contaminación de los ecosistemas, la sobreexplotación de los recursos naturales, la expansión agrícola, el crecimiento desordenado de los asentamientos humanos, así como la persistencia de patrones de producción y consumo insostenibles, causan gran presión al medio ambiente y actúan como multiplicadores de riesgos.

[13] Banco Mundial (2005), Natural Disaster Hotspots: A Global Risk analysis. Washington, DC: Banco Mundial: <https://bit.ly/3Se49yF>

[14] Banco Mundial (2015), Gestión Financiera y Aseguramiento del Riesgo de Desastres en República Dominicana. <https://bit.ly/3ECLuZU>

05 Estado de Derecho y Derechos Humanos

En las últimas dos décadas, el país ha implementado cambios institucionales y normativos que han mejorado la calidad de la democracia, y ha puesto en marcha reformas orientadas a fortalecer un Estado moderno e institucional, a partir de una reorganización del sector público, del sistema de justicia y la despolitización del Ministerio Público, en un marco de gobernanza pública democrática y transparente. No obstante, aún persisten debilidades del marco institucional y del servicio público, principalmente a nivel territorial, que ralentizan el proceso de desarrollo del país. Si bien en materia de confianza y lucha contra la corrupción se observan avances importantes, el país sostiene el desafío, en línea con otros países de la región, de mejorar la confianza de la ciudadanía en los estamentos de gobierno, control y fiscalización. El combate a la corrupción y la impunidad se inscribe todavía en un contexto de fragilidad institucional con déficits de transparencia y rendición de cuentas. Persisten brechas de participación ciudadana y de mecanismos inclusivos para la toma de decisiones, que se suman al reto de garantizar la participación y representación paritaria de las mujeres en la vida pública.

La violencia en todos sus tipos y manifestaciones es un grave problema que deteriora la seguridad ciudadana, amenaza la cohesión social y tiene un impacto particular en grupos específicos de población. La violencia por razones de género es un desafío estructural que afecta al 68.8% de las mujeres mayores de 15 años[15]. El país es el segundo a nivel regional con la tasa más alta de femicidios[16] (2.4 por cada cien mil mujeres) y está entre los cuatro con mayor incidencia de uniones tempranas[17]. Alrededor del 70% de las niñas y niños entre 1 y 14 años son víctimas de disciplina violenta[18], mientras que el 96.7% de las personas con orientación sexual diversa encuestados [19] reportaron haber sido víctimas o presenciado alguna forma de violencia por su orientación sexual o identidad de género. La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes se agrava por la tolerancia social que le subyace[20], combinado con el escaso número de enjuiciamientos, condenas y sentencias poco severas[21], así como la falta de mecanismos eficaces de prevención, respuesta y protección a las víctimas.

La República Dominicana muestra avances normativos, institucionales y de creación de políticas públicas en materia de inclusión y protección de los derechos humanos, en línea con sus compromisos internacionales. Sin embargo, se observan brechas en el reconocimiento y la garantía de los derechos de grupos específicos de población, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas migrantes, personas con discapacidad y personas con diversidad sexual y de género. Los mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado al país intensificar esfuerzos para promover los derechos y fortalecer la protección integral de las minorías, así como de los grupos expuestos al estigma y/o la discriminación.

[15] Oficina Nacional de Estadística (ONE), Ministerio de la Mujer y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres (ENESIM-2018). Año 2018.

[16] CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, <https://oig.cepal.org/es/indicadores/femicidio>

[17] En enero de 2021, se promulgó la Ley 1-21, la cual modificó algunos artículos del Código Civil y otras normativas y prohibió el matrimonio para personas menores de 18 años. La Ley 1-21 es un gran avance, sin embargo queda pendiente abordar jurídicamente las uniones tempranas, así como sus principales causas relacionadas con las normas sociales, pautas culturales y de comportamiento que promueven y normalizan socialmente la unión temprana de una niña o de una adolescente con un adulto mayor.

[18] Oficina Nacional de Estadística (ONE), ENHOGAR-MICS 2019, <https://bit.ly/3bfycpO>

[19] PNUD (2021), Informe de Resultados de la Encuesta Nacional LGBTI 2020, <https://bit.ly/3PTdDic>. Este estudio es el más completo realizado en la República Dominicana sobre las condiciones sociodemográficas y de vida de las personas LGBTI en el país e identifica las barreras estructurales que dificultan el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTI. Implicó una encuesta con 7,122 respuestas de todo el país, incluyendo dominicanas y dominicanos en el exterior. Los resultados de la encuesta aportan una guía científica y la evidencia necesaria para informar leyes, políticas públicas y presupuestos.

[20] Gobierno de la República Dominicana/Ministerio de la Mujer (2020), Plan Estratégico por una vida libre de violencia para las mujeres.

[21] Comité CEDAW, Observaciones finales sobre el octavo informe periódico de la República Dominicana, CEDAW/C/DOM/CO/8, 1 de marzo de 2022, Párr. 21; Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero a quinto combinados de la República Dominicana, CRC/C/DOM/CO/3-5, 6 de marzo de 2015, Párr. 32 c) y d)

Progreso hacia la Agenda 2030 en República Dominicana

Inmersos ya en la Década de Acción, la trayectoria de la República Dominicana hacia el logro de la Agenda 2030 muestra un panorama mixto, con avances de cumplimiento en algunas metas y ODS, pero con desafíos persistentes en la superación de brechas económicas, sociales, ambientales, y en el ejercicio pleno de los derechos humanos. El propio Informe Nacional Voluntario 2021 así lo refleja, destacando el impacto de la pandemia de la COVID-19 en los retos pendientes.

Considerando el nivel de cumplimiento y la trayectoria reportada por el país en sus dos informes nacionales voluntarios, los mayores desafíos se concentran en los ODS relacionados con la alimentación, salud y bienestar, reducción de las desigualdades, y paz, justicia e instituciones sólidas. Persisten desafíos significativos para lograr los ODS relacionados con el agua y saneamiento, la energía limpia, el crecimiento económico y el trabajo decente, la industria e innovación, las ciudades sostenibles, la vida marina, la vida terrestre, y las alianzas para el desarrollo sostenible. Subsisten retos por superar para lograr la consecución de los ODS vinculados con la educación de calidad, la igualdad de género, la producción y consumo sostenibles, así como la acción contra el clima. El impacto regresivo de la pandemia redujo considerablemente las posibilidades del país de poner fin a la pobreza extrema en esta década.

06



Breve recuento de los desafíos del país por ODS [22]



La pandemia tuvo un impacto en el aumento de la pobreza monetaria general de 2.9 puntos, colocándose en 23.9% en 2021. La pobreza es más aguda en el ámbito rural (24.7%), en las mujeres (25.78%), en el macrorregión sur (31.80%) y en los niños, niñas y adolescentes (33.1%). La tasa de pobreza monetaria extrema se situó en 3.06% en 2021 (MEPyD, Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria, 2021). La brecha de pobreza general entre hombres y mujeres se ha ensanchado, pasando de 2.57 pp a 3.97 pp (INV 2021). El 16.2% de la población vive en pobreza multidimensional (PNPSP).



Alrededor del 10.5% de la población carece de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades energéticas para llevar una vida sana y activa. Según estimaciones del Mapa Mundial del Hambre del Programa Mundial de Alimentos, el 15 % de la población dominicana tiene un consumo insuficiente de alimentos. Datos prepandemia señalan que el 7% de niños y niñas menores de 5 años presentaban desnutrición crónica, 2% desnutrición aguda y 8% sobrepeso (ENHOGAR-MICS)



Los indicadores de cobertura muestran reducidos avances y existen retos en materia de calidad de los servicios. La Razón de Mortalidad Materna se mantiene muy alta (126 por 100 mil NV) y la tasa de mortalidad neonatal (21 por cada 1,000 NV) duplica el promedio regional (9 por cada 1,000 NV). El país tiene el mayor índice de reproducción en la adolescencia de la región, con 77 nacimientos por cada mil adolescentes entre 15 y 19 años. Se observan progresos hacia las metas de erradicar el VIH/SIDA, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades tropicales (INV 2021).



La cobertura del sistema educativo en el nivel primario es muy alta y en el nivel secundario ha crecido. Sin embargo, persisten brechas de cobertura y calidad de los servicios. La calidad de los resultados de aprendizaje es un gran desafío: el 88% de niños y niñas de tercer grado no están adquiriendo las competencias esperadas de lengua española y el 73% de matemáticas. Solo el 60% de los jóvenes ha concluido la educación secundaria, con grandes diferencias entre el quintil más rico (90%), versus el más pobre (20%) (ENHOGAR-MICS 2019)



Más de tres cuartas partes (76.9%) de las mujeres de 15 a 29 años han experimentado algún episodio de violencia a lo largo de toda su vida, mientras que el 65% de las adolescentes de 15 a 17 años ha sido víctima de violencia sexual (ENESIM 2018). El 32% de las mujeres entre 20 a 24 años de edad se casaron o unieron antes de los 18 años (ENHOGAR-MICS 2019). Las mujeres trabajan más del doble que los hombres en el hogar en tareas no reconocidas, visibilizadas, ni remuneradas. El porcentaje global de mujeres que ocupan posiciones de toma de decisión en el ámbito público es de 37% (PNPSP).



El 93% de la población cuenta con acceso a agua de la red pública, dentro o fuera de la vivienda, con una importante brecha entre la población urbana y rural, y entre las regiones del desarrollo del país. El porcentaje de la población que dispone de servicios de saneamiento gestionados de manera segura ha sido estimado en 54.4%, siendo desigual entre grupos socioeconómicos, zona rural y urbana, y regiones del país (INV 2021)



Los sistemas de energía eléctrica alcanzan al 98.7% de los 2.9 millones hogares en el país. Sin embargo, la cobertura es menor en las zonas rurales (94.8%), que en las urbanas (99.5%), y poco más de 90mil hogares aún carecen de acceso a la electricidad. El consumo de energía renovable alcanzó el 16.3% de la producción total en 2018, porcentaje reducido, pesar del incremento en la generación total de energía de fuentes renovables. (Plataforma ODS).

[22] Este recuadro tiene como fuente: los dos Informes Nacionales Voluntarios (2018 y 2021), la Plataforma para el Seguimiento de los ODS (<http://ods.gob.do/Home/Inicio>), los datos oficiales de las encuestas ENHOGAR-MICS 2019, ENESIM 2018, ENCFT 2021; así como, el PNPSP 2021-2024. Algunos datos tienen como fuente el Banco Mundial.

Breve recuento de los desafíos del país por ODS



La tasa de desocupación ampliada aumentó de 10.8 % en 2019 a 15.0 % en 2020. En la población de 15-24 años, la desocupación abierta de las mujeres es 1.8 veces más que la de los hombres. La población con discapacidad presenta un mayor nivel de inactividad laboral (61.1%) frente al resto de la población (56.3%). La proporción de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian, no tienen empleo, ni reciben capacitación ha sido estimada en 36.7% en 2020. La pandemia tuvo un impacto diferenciado en los sectores productivos: las actividades industriales y de servicios registraron un notable decrecimiento, mientras que la actividad agropecuaria creció 2.8 %. El 80% de las MIPYMES encuestadas reportaron una caída en sus ingresos como resultado de la pandemia (INV 2021)



La proporción del valor agregado de la manufactura al PIB es del 13.7% del PIB y ha venido perdiendo empleos (BCRD). En 2017, el 49% de las PYMES tuvieron préstamo o línea de crédito. El gasto en innovación y desarrollo como porcentaje del PIB no ha mostrado avances y se ha mantenido por debajo del 0.10% (DIGEPRES).



En 2021, el 14% de las personas vivían por debajo del 50% de la mediana de los ingresos (ENCFT). La concentración del ingreso en la economía nacional, medida a través del coeficiente GINI, se ha reducido, pero el país sigue siendo altamente desigual. Según el Boletín de Pobreza de 2021, en la zona urbana (0.411) se reporta un mayor nivel de desigualdad que en la zona rural (0.362).



La proporción de la población viviendo en tugurios se ha reducido, pero todavía un 12.1% de la población urbana vive en asentamiento informales y en viviendas inadecuadas (INV 2018). Para el 2030, la población total alcanzará los 11.25 millones de personas, de las cuales más de la tercera parte (39.8%), vivirán en la zona metropolitana (INV 2018). Para el 2050, el 92% de la población residirá en zonas urbanas (Banco Mundial, 2022).



El país cuenta con una hoja de ruta de producción y consumo sostenibles que enfrenta desafíos de articulación y apropiación nacional. El consumo de material interno (1.03 tons) y la capacidad de generación de energía renovable muestran avances favorables hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles. Se estima que las presiones planetarias (emisiones de dióxido de carbono y la huella material) impactan negativamente el Índice de Desarrollo Humano del país en alrededor de 4%. (INV 2021)



En el periodo 2015-2020, el 11.3 % de la población ha sido directamente afectada por desastres. Las emisiones totales de gases de efecto invernadero incrementaron 18% en el periodo 2010-2015. El CO2 representa alrededor del 70% del total de emisiones de GEI, aumentando 25.49 % con respecto al 2010, mientras que el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) representan el 28.5 % y el 1.8 %, respectivamente (INV 2021).



El país cuenta con un sistema de áreas protegidas en el que se incluyen dos parques submarinos, con una superficie de 256.57 km2. Poco más del 99% de las áreas protegidas pertenecen al área marina. El país posee una de las líneas costeras más amplias del Caribe, y una notoria extensión de manglares que representan el 0.61% del territorio nacional (INV 2018).



El país cuenta con un sistema de áreas protegidas y la conservación de ecosistemas terrestres ha tenido importantes avances. Sin embargo, el índice de la lista roja del país en 2018 es del 0.50 (Plataforma ODS). Se estima que 22% de los animales están en peligro de extinción, 38% de las plantas están en algún tipo de peligro y las especies invasoras con la tercera causa de pérdida de biodiversidad (INV 2018).

Breve recuento de los desafíos del país por ODS

16 PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS



La tasa general de homicidios descendió de 11.8 por cada 100 mil habitantes en 2019 a 10.8 en 2020, siendo mucho más alta en los hombres y en la población joven. El país se ubica en segundo lugar a nivel regional en cuanto a la tasa de feminicidios (2.4 por cada 100 mil mujeres). En el Índice de Percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional), la República Dominicana obtuvo 30 puntos sobre 100, ubicándose en el lugar 128 de 180 países.

17 ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS










El total de ingresos públicos como proporción al PIB se mantiene en alrededor de 13%, casi todo proveniente de impuestos, y solo entre 0.3% y 0.5% de otras fuentes. Las remesas representaron ingresos de divisas del orden del 10.2 % del PIB en 2020 (INV 2021). La República Dominicana produce información para el seguimiento del 48.2% del marco global de indicadores de los ODS (ONE 2020, INV 2021)

El Informe Nacional Voluntario 2021 identificó la persistencia de diversos retos a nivel de la implementación, vinculados principalmente a: 1) la movilización de recursos internos para la financiación integral y progresiva de los ODS; 2) las capacidades institucionales y la coordinación interinstitucional para la coherencia de políticas; 3) la generación de alianzas para la co-creación y puesta en marcha de soluciones integrales e innovadoras; y 4) Las capacidades estadísticas para generar datos suficientes, desagregados, oportunos y de calidad que informen la toma de decisiones y las políticas públicas en todas las dimensiones de la sostenibilidad.







Desafíos y oportunidades hacia el 2030

Desde una visión integrada del contexto y las tendencias descritas en este Análisis Común de País, el Equipo de País ha identificado cuatro grandes desafíos del desarrollo y tres retos transversales que son prioritarios y frente a los cuales el SNU y el Gobierno dominicano están llamados a concentrar sus esfuerzos de cooperación en los próximos cinco años:




-  Persistente pobreza y brechas en el ejercicio de derechos y acceso a oportunidades de grupos de población que se están quedando atrás por la intersección de factores de discriminación, desigualdad y exclusión
 -  Crecimiento económico dinámico, próspero y resiliente, pero desigual para beneficiar y recuperar a todos los territorios, sectores económicos y grupos de población, con retos estructurales para impulsar empleos productivos y mercados laborales inclusivos que reduzcan la pobreza y la desigualdad
 -  Modelo económico con alto impacto ambiental y retos para la efectiva mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, así como debilidades en la gestión multidimensional del riesgo de emergencias, desastres y eventos climatológicos, con graves repercusiones económicas y sociales en los territorios
 -  Debilidades en la aplicación del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, la institucionalidad sólida, eficiente y resiliente, el acceso a la justicia, la democracia inclusiva y participativa, así como la seguridad ciudadana y la cohesión social
-
-  Desigualdades de género a lo largo del ciclo de vida y en todas las esferas del desarrollo sostenible, con un reto estructural de violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes
 -  Desarrollo territorial desigual y rezagos estructurales en zonas rurales, urbanas y periurbanas, en particular de la zona fronteriza
 -  Prácticas y normas sociales y culturales que discriminan, estigmatizan, excluyen y vulneran los derechos humanos de grupos de población

Para acelerar el ritmo y alcanzar la visión de desarrollo a la cual aspira el país, es necesario transformar estos desafíos en oportunidades de progreso, para reconstruir mejor, mientras se avanza en la implementación integral de la END 2030 y los ODS. Esto implica orientar acciones más audaces en los próximos años con el fin de:

-  1 Acelerar la reducción de la pobreza y las desigualdades, asegurando más y mejores oportunidades para los grupos y territorios más rezagados con equidad e inclusión.
-  2 Lograr la triada de crecimiento dinámico, inclusivo y sostenible, con enfoque de prosperidad compartida para todos los grupos de población, sectores productivos y territorios del país, y mayor impacto en la reducción de la pobreza y las desigualdades.

-  Aprovechar las oportunidades únicas del país como pequeño estado insular en desarrollo para promover un modelo de desarrollo basado en el valor y la riqueza de su capital natural como activo para expandir opciones de crecimiento sostenibles, haciendo frente a los riesgos con una mejor preparación, adaptación y resiliencia.
-  Consolidar el Estado de derecho y fortalecer la institucionalidad democrática para mejorar la confianza en las instituciones, garantizando los derechos humanos y salvaguardando la seguridad ciudadana.

Estos desafíos y oportunidades convergen entre sí, y para abordarlos será necesario trabajar con una visión integradora, transversalizando tres prioridades como catalizadoras para una recuperación socioeconómica hacia un desarrollo más inclusivo, resiliente y sostenible:

-  Avanzar sostenidamente hacia la igualdad de género, mediante una transformación profunda orientada a cerrar las brechas sociales y económicas que impactan la vida de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida, abordando las causas de la desigualdad, discriminación y la violencia por razones de género.
-  Abordar con enfoque multidimensional las desigualdades territoriales (sociales, económicas, ambientales e institucionales) para cerrar múltiples brechas. La territorialización de las políticas públicas o la localización de los ODS es precisamente implementar la Agenda 2030 donde viven las personas.
-  Promover estrategias de cambio cultural y de comportamientos para incidir en las normas y prácticas sociales, culturales e institucionales que están en la raíz de las distintas formas de discriminación, violencia, desigualdad y exclusión que afectan a los grupos de población en situación de especial vulnerabilidad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



NACIONES UNIDAS
REPÚBLICA DOMINICANA



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

